

Señores:

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN CAUCA.

E.

S.

D.

YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma actuando en nombre propio, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **poder especial**, amplio y suficiente como abogado principal a **FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 4.616.302 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura y como abogada sustituta a **GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ**, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 1.061.710.646 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y lleve a cabo hasta su terminación **DEMANDA DE CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA en CONTRA del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios morales y materiales causados por las lesiones ocasionadas a mi Hermano **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** el día 30 de octubre de 2017 cuando fue lesionado dentro del establecimiento penitenciario y carcelario "INPEC" con Arma Blanca, causándole múltiples lesiones en diferentes partes de su humanidad.

Mis apoderados cuentan con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. y C.G.P. A su vez para realizar derechos de petición ante la entidad demandada para la obtención de la documentación necesaria para adelantar el trámite judicial y presentar acciones de tutela para la obtención de los documentos si fuere necesario en relación a los hechos del presente poder.

Sírvase señor Juez, reconocerles personería jurídica en los términos aquí señalados.

Atentamente,

Yeferson Alesander Montilla Ortiz
YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ
CC. No. 1.061.768.248 de Popayán Cauca.

Aceptamos.

Fabio Arturo Andrade Campo
FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO
CC. No. 4.616.302 Popayán.
TP. No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura.

GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ
GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ
CC. No. 1.061.710.646 Popayán.
TP. No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
POPAYÁN
 Libertad y Orden
 La suscrita Jueza del Despacho a la luz de lo preceptuado por el Artículo
 74 del C.G. del P, deja constancia que el anterior escrito fue presentado
 personalmente el 18 FEB 2019 de febrero de 2019 por su
 signatario(a) Jeferson Alexander Montilla
 identificado(a) con CC No. 1.961.768.248 de
Boyacá
 El (La) compareciente,
Jeferson Montilla Ortiz

Magnolia Cortes Cardozo Indice Derecho
MAGNOLIA CORTES CARDOZO
JUEZA

Nota: Presente Comprobante de
 Documento en trámite de
 la Registraduría Nacional del
 Estado Civil #45.856426

Magnolia Cortes Cardozo

Señores:

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN CAUCA.

E.

S.

D.

FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma actuando en nombre propio, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **poder especial**, amplio y suficiente como abogado principal a **FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 4.616.302 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura y como abogada sustituta a **GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ**, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 1.061.710.646 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y lleve a cabo hasta su terminación **DEMANDA DE CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA** en **CONTRA** del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios morales y materiales causados por las lesiones ocasionadas a mi hijo **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** el día 30 de octubre de 2017 cuando fue lesionado dentro del establecimiento penitenciario y carcelario "INPEC" con Arma Blanca, causándole múltiples lesiones en diferentes partes de su humanidad.

Mis apoderados cuentan con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. y C.G.P. A su vez para realizar derechos de petición ante la entidad demandada para la obtención de la documentación necesaria para adelantar el trámite judicial y presentar acciones de tutela para la obtención de los documentos si fuere necesario en relación a los hechos del presente poder.

Sírvase señor Juez, reconocerles personería jurídica en los términos aquí señalados.

Atentamente,

Francisco Alejandro M.

FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO

CC. No. 10.536.252 de Popayán Cauca

Aceptamos.

Fabio Arturo Andrade Campo

FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO

CC. No. 4.616.302 Popayán.
TP. No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura.

GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ

GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ

CC. No. 1.061.710.646 Popayán.
TP. No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura.

CONSEJO AUTÓNOMO DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - CAJICA
Cajalupán, Yucatán

19 SEP 2018

Presente

Representado por el suscrito por:

Francisco Alejandro Montilla

10,536 252 de Registro

Por

Acta

Francisco Alejandro

2018
Jefe Oficina Ejecutiva

Señores:

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN CAUCA.

E.

S.

D.

OLGA LUCIA ORTIZ BOLAÑOS, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma actuando en nombre propio, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **poder especial**, amplio y suficiente como abogado principal a **FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 4.616.302 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura y como abogada sustituta a **GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ**, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 1.061.710.646 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y lleve a cabo hasta su terminación **DEMANDA DE CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA** en **CONTRA** del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios morales y materiales causados por las lesiones ocasionadas a mi hijo **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** el día 30 de octubre de 2017 cuando fue lesionado dentro del establecimiento penitenciario y carcelario "INPEC" con Arma Blanca, causándole múltiples lesiones en diferentes partes de su humanidad.

Mis apoderados cuentan con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. y C.G.P. A su vez para realizar derechos de petición ante la entidad demandada para la obtención de la documentación necesaria para adelantar el trámite judicial y presentar acciones de tutela para la obtención de los documentos si fuere necesario en relación a los hechos del presente poder.

Sírvase señor Juez, reconocerles personería jurídica en los términos aquí señalados.

Atentamente,

Olga Lucia Ortiz Bolaños.
OLGA LUCIA ORTIZ BOLAÑOS
CC. No. 25.281.480 de Popayán Cauca

Aceptamos.

Fabio Arturo Andrade Campo
FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO
CC. No. 4.616.302 Popayán.
TP. No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura.

GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ
GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ
CC. No. 1.061.710.646 Popayán.
TP. No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura.

CONSEJO SUPERIOR DE LA POLICIA 6
DIRECCION EJECUTIVA SECCION
ADMINISTRACION J. R. L. C. Ch. A.
OFICINA JUDICIAL

Сопаян, 19 SEP 2018

Olga Lucia Ortiz B.
25.281.480 de Popayan

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

FIRMA:

Polga Lucia Ortiz Bolanos.

[Signature]
Jefe Oficina Judicial

Señores:

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN CAUCA.

E.

S.

D.

DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma actuando en nombre propio y en representación de mi hija menor de edad **CAROL YULIANA MONTILLA BENAVIDES**, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **poder especial**, amplio y suficiente como abogado principal a **FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 4.616.302 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura y como abogada sustituta a **GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ**, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 1.061.710.646 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y lleve a cabo hasta su terminación **DEMANDA DE CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA** en **CONTRA** del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios morales y materiales causados por las lesiones a mi ocasionadas el día 30 de octubre de 2017 cuando fui lesionado dentro del establecimiento penitenciario y carcelario "INPEC" con Arma Blanca, causándome múltiples lesiones en diferentes partes de mi humanidad.

Mis apoderados cuentan con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. y C.G.P. A su vez para realizar derechos de petición ante la entidad demandada para la obtención de la documentación necesaria para adelantar el trámite judicial y presentar acciones de tutela para la obtención de los documentos si fuere necesario en relación a los hechos del presente poder.

Sírvase señor Juez, reconocerles personería jurídica en los términos aquí señalados.

Atentamente,

David Alejandro Montilla Ortiz

DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ

CC. No. 1.061.731.500 de Popayán Cauca

Aceptamos.

Fabio Arturo Andrade Campo

CC. No. 4.616.302 Popayán.

TP. No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura.

GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ

CC. No. 1.061.710.646 Popayán.

TP. No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura.

JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

POPAYAN -CAUCA-

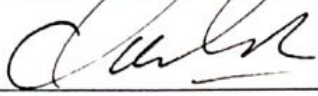
PRESENTACION PERSONAL

El anterior escrito fue presentado personalmente
ante la suscrita JUEZ, GLORIA MILENA PAREDES ROJAS
Hoy 21 de SEPTIEMBRE de 2018

Por su(s) signatario(a) DAVID ALEJANDRO MONTILLA
ORTIZ

Quien exhibió(eron) su(s) C.C.Nº 1.061.731.500
expedida en POPAYAN - CAUCA

David Alejandro Montilla Ortiz 1.061.731.500



juez

Señores:

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN CAUCA.

E.

S.

D.

YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma actuando en nombre propio, por medio del presente escrito manifiesto que confiero **poder especial**, amplio y suficiente como abogado principal a **FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO**, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 4.616.302 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura y como abogada sustituta a **GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ**, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 1.061.710.646 expedida en Popayán y portador de la tarjeta profesional No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación inicie, tramite y lleve a cabo hasta su terminación **DEMANDA DE CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA en CONTRA del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios morales y materiales causados por las lesiones ocasionadas a mi Hermano **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** el día 30 de octubre de 2017 cuando fue lesionado dentro del establecimiento penitenciario y carcelario "INPEC" con Arma Blanca, causándole múltiples lesiones en diferentes partes de su humanidad.

Mis apoderados cuentan con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas las facultades establecidas en el artículo 70 del C.P.C. y C.G.P. A su vez para realizar derechos de petición ante la entidad demandada para la obtención de la documentación necesaria para adelantar el trámite judicial y presentar acciones de tutela para la obtención de los documentos si fuere necesario en relación a los hechos del presente poder.

Sírvase señor Juez, reconocerles personería jurídica en los términos aquí señalados.

Atentamente,

Yeimi Alesandra Montilla Ortiz
YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ
CC. No. 1.061.733.517 de Popayán Cauca.

Aceptamos.

Fabio Arturo Andrade Campo
FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO
CC. No. 4.616.302 Popayán.
TP. No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura.

GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ
GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ
CC. No. 1.061.710.646 Popayán.
TP. No. 230021 del Consejo Superior de la Judicatura.

TRIBUNAL DE PAZ DEL CAUCA
SECRETARÍA

Presentado por: Yenni Alcandía Montilla Ortiz
Hoy: 25 SEP 2018
Nombre: Alexandra Montilla Ortiz
Cédula: L.061.933-517
y Tarjeta Pro: Popayán - C
del C.S.J.

El Compareciente: Yenni Alcandía Montilla Ortiz

Secretario(a):



**NOTARÍA PRIMERA DE POMIYAN
CERTIFICA**

ORDINALES O
CODIGOS DE
LOS MESES

ENERO	01	FEBRERO	02	MARZO	03	ABRIL	04
MAYO	05	JUNIO	06	JULIO	07	AGOSTO	08
SEPT.	09	OCTUBRE	10	NOV.	11	DIC.	12

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE NACIMIENTO

26998194

IDENTIFICACION N°

Parte basica

Parte congo

90-10-10

OFICINA REGISTRO CIVIL: NOTARIA PRIMERA ---
Municipio y Departamento: POPAYAN-CAUCA ---
2201

SECCION GENERICA

INSCRITO: 6 Primer apellido: MONTILLA --- 7 Segundo apellido: ORTIZ --- 8 Nombres: YEIMI ALESANDRA ---
SEXO: 9 ESCRIBA MASCULINO O FEMENINO: FEMENINO --- 10 Fecha de nacimiento: 10 OCTUBRE --- 11 Mes: --- 12 Año: 1990
LUGAR DE NACIMIENTO: 13 País: COLOMBIA --- 14 Departamento: CAUCA --- 15 Municipio: POPAYAN ---

SECCION ESPECIFICA

DATOS DEL NACIMIENTO: 16 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc. donde ocurrió el nacimiento: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE --- 17 Hora: 8 AM
18 Documento presentado - Antecedente (Carta, estudio, Acta de familia, etc.): CERTIFICADO DE NACIMIENTO 04066 --- 19 Nombre del profesional que certifica el nacimiento: ILEGIBLE ---
MADRE: 20 Apellidos (con soltera): ORTIZ BOLAÑOS --- 21 Nombres: OLGA LUCIA --- 22 Nacionalidad: COLOMBIANA --- 23 Profesión u oficio: HOGAR ---
24 Identificación (clase y número): 25.281.480 DE POPAYAN --- 26
PADRE: 27 Apellidos: MONTILLA CALIBIO --- 28 Nombres: FRANCISCO ALEJANDRO --- 29 Nacionalidad: COLOMBIANO --- 30 Profesión u oficio: AGRICULTOR ---
31 Identificación (clase y número): 10.536.252 DE POPAYAN --- 32

DENU- CIANTE: 33 Identificación (clase y número): 10.536.252 DE POPAYAN --- 34 Firma (autógrafa): FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO
35 Dirección postal: EL BOQUERON --- 36 Nombre: FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO
TESTIGO: 37 Identificación (clase y número): 34.320.726 DE POPAYAN --- 38 Firma (autógrafa): Ana Lucia Santiago Avila
39 Domicilio (Municipio): EL BOQUERON --- 40 Nombres: ANA LUCIA SANTIAGO AVILA ---
TESTIGO: 41 Identificación (clase y número): 76.319.925 DE POPAYAN --- 42 Firma (autógrafa): ISATAS MENESSES SALAZAR
43 Domicilio (Municipio): TRANSVERSLA 33 # 17A -31
FECHA DE REGISTRO: (FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO)
45 Día: 26 46 Mes: MAYO --- 47 Año: 1999
48 Nombre: ISATAS MENESSES SALAZAR ---
Firma (autógrafa): Dra. Ana Elvira Guzmán de Varona
49 No. del funcionario: --- 50 Libro de registro: ---

ORIGINAL PARA LA ORIGINAL

NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN
ESTE REGISTRO CIVIL TIENE
VALIDEZ PERMANENTE

NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN
CERTIFICA

ESTA FOTOCOPIA DEL ORIGINAL CORRESPONDE AL REGISTRO
DE NACIMIENTO INSCRITO EN EL SERIAL No. 26998194
SE EXPIDE PARA PARENTESCO.

EL SOLICITANTE: Jefferson Montilla

C.C. 7061768248

POPAYAN. 12 SEP 2016

ANA ELVIRA GUZMAN DE
Notaria 1a. del Circuito de Popayan



ESPAÑO EN BLANC



ENERO 01 FEBRERO 02 MARZO 03 ABRIL 04
MAYO 05 JUNIO 06 JULIO 07 AGOSTO 08
SEPT. 09 OCTUBRE 10 NOV. 11 DICIEMBRE 12

REPÚBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL



REGISTRO DE NACIMIENTO

IDENTIFICACION N°

1 Parte básica 2 Parte complementaria
94-02-15

26998227

OFICINA REGISTRO CIVIL 3 Clase (Notaria, Consulado, Registraduría, Estado Civil, Inspección, etc.) 4 Municipio y Departamento 5 Código
NOTARIA PRIMERA - - - - - POPAYAN - CAUCA - - - - - 2201

SECCION GENERICA

INSCRITO 6 Primer apellido MONTILLA - - - - - 7 Segundo apellido ORTIZ - - - - - 8 Nombres YEFERSON ALESANDER - - - - -
SEXO 9 ESCRIBA MASCULINO O FEMENINO MACULINO - - - - - FECHA DE NACIMIENTO 10 Dia 11 Mes 12 Año
15 FEBRERO - - - - - 1994
LUGAR DE NACIMIENTO 13 Pais 14 Departamento 15 Municipio
COLOMBIA - - - - - CAUCA - - - - - POPAYAN - - - - -

SECCION ESPECIFICA

DATOS DEL NACIMIENTO 16 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento 17 Hora
CASA DE HABITACION EL BOQUERON - - - - - 12,40 AM
18 Documento presentado - Antecedente (Cert. médico, Acta parroquial, etc.) 19 Nombre del profesional que certificó el nacimiento 20 N° licencia
DECLARACION DE TESTIGOS - - - - - - - - - -
MADRE 21 Apellidos (de soltera) 22 Nombres 23 Edad (en años)
ORTIZ BOLAÑOS - - - - - OLGA LUCIA - - - - - 26
24 Identificación (clase y número) 25 Nacionalidad 26 Profesión u oficio
25281480 DE POPAYAN - - - - - COLOMBIANA AMA DE CASA - - - - -
PADRE 27 Apellidos 28 Nombres 29 Edad (en años)
MONTILLA CALIBO - - - - - FRANCISCO ALEJANDRO - - - - - 40
30 Identificación (clase y número) 31 Nacionalidad 32 Profesión u oficio
10.536.252 DE POPAYAN - - - - - COLOMBIANO AGRICULTOR - - - - -

33 Identificación (clase y número) 34 Dirección postal
10.536.252 DE POPAYAN - - - - - EL BOQUERON - - - - -
TESTIGO 35 Identificación (clase y número) 36 Domicilio (Municipio)
76.382.366 DE POPAYAN - - - - - CALLE 5 # 15-91 LA ESMERALDA - - - - -
TESTIGO 37 Identificación (clase y número) 38 Domicilio (Municipio)
25.481.959 DE LA VEGA - - - - - CARRERA 11 # 23-25 EL DEAN - - - - -
FECHA DE INSCRIPCION (FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO)
15 Dia 16 Mes 17 Año
28 MAYO - - - - - 1994

39 Nombre del profesional que certificó el nacimiento 40 Firma (autógrafa)
FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBO
41 Nombre del profesional que certificó el nacimiento 42 Firma (autógrafa)
ELIECER HERNANDEZ RIVERA
43 Nombre del profesional que certificó el nacimiento 44 Firma (autógrafa)
FABIOLA GARCIA DE RIVERA
45 Nombre del funcionario que recibió el acta 46 Firma (autógrafa)
DRA. ANA ELVIRA GUZMAN DE VARGAS

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN

CLASE: PRIMERA

Se hace constar que el acta inscrito al folio 26 del Registro Civil que se lleva en esta notaría

EL 4 JUN 1994

ANNA ELVIRA GUZMAN DE VARGAS
Notaria Primera de Popayán



26998193

REGISTRO DE NACIMIENTO

88-09-19

NOTARIA PRIMERA - - - -

POPAYAN - - - CAUCA - - -

2201

SECCION GENERICA

1. Primer apellido MONTILLA + + + -	2. Segundo apellido ORTIZ - - - -	3. Nombres DAVID ALEJANDRO - - - -
4. ESCRIBA MASCULINO O FEMENINO MASCULINO - - - -	5. FECHA DE NACIMIENTO 19	6. Mes SEPTIEMBRE
7. País COLOMBIA	8. Departamento CAUCA - -	9. Municipio POPAYAN - - -

SECCION ESPECIFICA

10. Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento CASA DE HABITACION EL BOQUERON - - - -	11. Hora 3,55 PM
12. Documento presentado - Antecedente (Cert. médico, Acta parroquial, etc.) DECLARACION DE TESTIGOS - - - -	13. Nombre del profesional que certificó el nacimiento - - - -
14. Antecedente (de antepasado) ORTIZ-BOLAÑOS - - - -	15. Nombres OLGA LUCIA - - - -
16. Identificación (clase y número) 25.261.480 DE POPAYAN - - - -	17. Nacionalidad COLOMBIANA - - -
18. Profesión u oficio HOGAR - - - -	19. Estado civil 26
20. Nombres MONTILLA - CALIBIO - - - -	21. Nombres FRANCISCO ALEJANDRO - - - -
22. Identificación (clase y número) 10.536.252 DE POPAYAN - - - -	23. Nacionalidad COLOMBIANO
	24. Profesión u oficio AGRICULTOR - - - -

25. Identificación (clase y número) 10.536.252 DE POPAYAN - - - -	26. Dirección postal BOQUERON - - -
27. Identificación (clase y número) 34.320.726 DE POPAYAN - - - -	28. Dominio (municipio) EL BOQUERON - - -
29. Identificación (clase y número) 76.319.925 DE POPAYAN - - - -	30. Identificación (clase y número) Transversal 33 # 17A17-B/32 de Marzo
31. Fecha en que se presenta este registro 26	32. Mes MAYO - -
33. Año 1999	34. Nombre del profesional que certificó el nacimiento FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO
	35. Firma (autógrafa) ANA LUCIA SANTIAGO AVILA - - -
	36. Nombre ISATAS MENESES SANCHEZ - - -
	37. Firma (autógrafa) ISATAS MENESES SANCHEZ - - -
	38. Nombre del funcionario que se hace el registro DRA. ANA ELVIRA GUZMAN DE VARGAS - - -

NOTARÍA PRIMERA DE POPAYAN
CERTIFICAESTA FOTOCOPIA DEL ORIGINAL CORRESPONDE AL
ACTA DEL FOLIO DEL REGISTRO CIVIL QUE SE
LLEVA EN EN ESTA NOTARÍA

POPAYAN, 16 NOV 2012

ANA ELVIRA GUZMAN
Notaria 1a. del CircuitoESTE REGISTRO CIVIL TIENE
VALIDEZ PERMANENTE

Señores:

**CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC" SAN ISIDRO
POPAYÁN CAUCA.**

REFERENCIA : DERECHO DE PETICION

GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.061.710.646 de Popayán y portadora de Tarjeta Profesional No. 230021 del Concejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.731.500 de Popayán, perpetro las siguientes peticiones en ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 23 de la constitución nacional y las disposiciones pertinentes, el Artículo 13 ley 1755 de 2015, que modifico la ley 1437 de 2011 manifiesto y realizo la siguiente Petición:

HECHOS

PRIMERO: Que por proceso Penal con Radicado No. 19001600060220170155500 por el presunto delito de Homicidio en grado de Tentativa, me encontré Recluido en este centro penitenciario y Carcelario desde marzo de 2017 hasta principios del presente año, en el cual me identificaba con TD No. 15354 en el Patio No. 4.

SEGUNDO: Que el día 30 de Octubre del año 2017, fui víctima de un ataque con arma corto punzante por parte de otro interno, causándome graves heridas en el brazo y pecho, por lo cual tuve que ser remitido al área de Sanidad de este centro de Reclusión, en donde se me brindo apoyo y asistencia médica Anotando en mi ingreso que las lesiones fueron causadas Con Arma Blanca.

TERCERO: Que por causa de este ataque denuncié con el PJ el mismo, y se hicieron las respectivas anotaciones en la Minuta de guardia por las lesiones que se me ocasionaron.

CONSIDERACIONES

No hay duda que el derecho de petición tiene su orden constitucional en el artículo 23 de la Constitución Nacional y tiene la categoría de fundamental, Sobre el derecho de petición, la Honorable Corte Constitucional en pronunciamiento del 25 de Mayo de 1992, Sentencia T-012, dijo:

"Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de uno de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y a la participación de todos en las decisiones que nos afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan con las funciones para las cuales han sido instituidas. (Art. 2 Constitución Nacional)"

De otra parte la corporación en mension ha fijado las reglas jurisprudenciales aplicables a la protección del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, doctrina que se reiteró en la Sentencia T-1089 de 2001, cuando señaló:

"El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan

Folios= 4

301018
(Cere)B

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve para sí el sentido de lo decidido.....

Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la Ley así lo determine...."

Ahora bien, Respetuosamente y por lo anterior solicito lo siguiente:

PETICIÓN

Basados en lo anteriormente expuesto y por medio del presente **DERECHO DE PETICION** que invoco solicito muy respetuosamente:

PRIMERO: Que se me remita copia de la Tarjeta de cadactilar..

SEGUNDO: Que se me remita copia de la Tarjeta Bibliográfica..

TERCERO: Copia del Informe de los hechos ocurridos el día 30 de Octubre del año 2017, fecha en la cual fui víctima de un ataque con arma corto punzante por parte de otro interno.

ANEXOS

1. Copia de Poder debidamente otorgado.
2. Copia de mi cedula de ciudadanía

NOTIFICACIONES

Por favor enviar respuesta a este derecho de petición a la CRA 6 c # 27 CN 31 Barrio Palacé Popayán Cauca.

Teléfono: 3014321991

Correo Electronico: ginnamarcela0820@hotmail.com

Cordialmente,


GINNA MARCELA ERAZO MARTINEZ
C.C. No. 1.061.710.646 de Popayán Cauca.
T.P. No. 230021 del C.S. de la Judicatura.

Establecimiento:
 Primer Apellido: **Martela** Segundo Apellido: **David** T.D. (Tarjeta Decadactilar): **15354** Nombres Completos: **Alexandro** Fecha y Hora de Atención: **3 Oct 17** Hora: **3:10** pm
 Tipo de Identificación: **DC** ☒ **CE** Número: **10617315000** Sexo: **M** Estado Civil: **3-10-17** Edad: **30**
 Nacionalidad:
 Fecha de Nacimiento:
 Lugar de Nacimiento:
 Procedencia: **4** Celda: **4** EPS:
 Ocupación anterior:
 Ocupación actual:
 Motivo de consulta:

Heridas con Arma Blanca

ANAMNESIS

Enfermedad Actual:

paciente quien hace ± 40 minutos Recibe Herida con Arma Blanca a nivel Percutor ~~del~~ brazo izquierdo y Hombro izquierdo por lo que es traído a Este Servicio.

Antecedentes Personales:

Ex Físico: Amable, alerta, orientado, Calabazador
con Herida en Hombro Sangrante
OTAS: CN

Antecedentes Familiares:	Diabetes Mellitus	ORL: CN	Asma
	Hipertensión arterial		Enf. Hematológicas
	Carcinomas	Cáncer. Rómico, Escarado	Nefropatías
	Cardiopatías		Enf. Endocrinas
	Hepatopatías	Pulm: Cumpios Bien ventilados	Enf. Mentales
	Otra, Cual?		

Antecedentes Quirúrgicos: **absd: CN**

SN: CN

Antecedentes Patológicos:

TORAX: Herida en Región de 3er Arco costal con L.H.

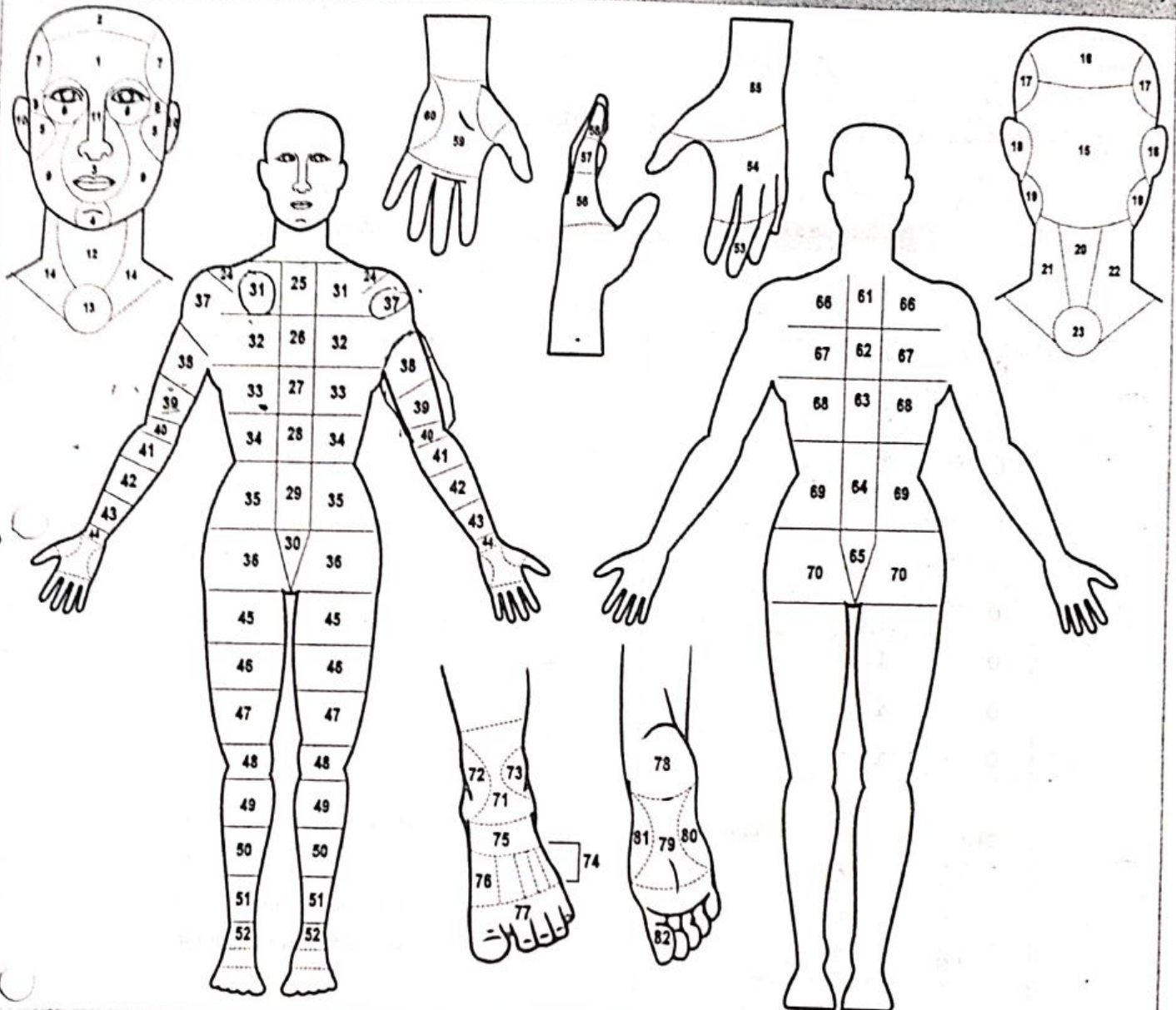
Antecedentes Farmacológicos: **no profunda (1cm).**

Antecedentes Toxicológicos: **Brazo: Herida de 8cm sin compromiso muscular**

Antecedentes Ginecológicos: **Hombro: Herida de 1cm superficial.**

Menarquia: **1. Herida torax no penetrante**
Inicio vida sexual: **2- Herida Brazo izquierdo**
Fecha última citología: **3- Herida Hombro izquierdo**
Alergias: **1- Suena con celo**
Discapacidad: **2- 1 sup Antitético**
Uso de ayudas: **SI** No Gafas: **SI** Muletas: **SI** Otras: **SI**
Limitación sensorial: **SI**
Sintomáticos Respiratorios: **SI** No Cual: **SI**
Signos vitales: **TA** **FC** **FR** **Glucemia: 1 sup Antitético**
Glasgow: **1 sup Antitético**
Temperatura: **1 sup Antitético**
Saturación de oxígeno: **1 sup Antitético**

David Alejandro Montilla T.D. 15354
Pag. 2
Cuadrícula Topográfica



- | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Frontal | 18. Anteroauricular | 35. Fosas Ilíacas | 51. T. Inferior Pierna | 67. Infraescapulares |
| 2. Parietal | 19. Mastoidea | 36. Inguinales | 52. Tobillo | 68. Lumbar |
| 3. Bucal | 20. Cervical Superior | 37. Tercio Sup. Brazo | 53. Dedos | 69. Flancos |
| 4. Mentoniana | 21. Cervical Izq. | 38. T. Medio Brazo | 54. Metacarpo | 70. Gluteos |
| 5. Malar | 22. Cervical Der. | 39. T. Inferior Brazo | 55. Carpo Mano | 71. Cuello Pie |
| 6. Orbital | 23. Prominente | 40. Flexión de Codo | 56. Falanges | 72. Región del Tobillo |
| 7. Temporal | 24. Deltoides | 41. Tercio Sup. Antebrazo | 57. Falanginas | 73. Tobillo |
| 8. Cigomatica | 25. Condroesternal | 42. Tercio Med. Antebrazo | 58. Falangetas | 74. Tarso |
| 9. Maseterica | 26. Condroesternal Inf. | 43. Tercio Inf. Antebrazo | 59. Palma de la mano | 75. Dorso |
| 10. Auricular | 27. Epigastrio | 44. Muñeca | 60. Eminencia Hipotenar | 76. Metatarso |
| 11. Nasal - Dorso | 28. Mesogastrio | 45. Tercio Sup. Muslo | 61. Dorsal Superior | 77. Dedos |
| 12. Suprahioldea | 29. Hipogastrio | 46. T. Medio Muslo | 62. Dorsal Medio | 78. Calcañal |
| 13. Infrahioldea | 30. Pubiana | 47. T. Inferior Muslo | 63. Dorsal Inferior | 79. Planta Pie |
| 14. Hioideas | 31. Supramamaria | 48. Rodilla | 64. Lumbar | 80. Borde Ext. Pie |
| 15. Occipital | 32. Mamaria | 49. Tercio Sup. Pierna | 65. Sacro | 81. Borde Int. Pie |
| 16. Parietal | 33. Hipocondrios | 50. T. Medio Pierna | 66. Escapulares | 82. Dedos |
| 17. Temporal | 34. Flancos | | | |

Establecimiento:

Nombre PPL:

Identificación:

David Alejandro Montilla

1061731500 pat 1041 TD 19354

30-10-17

Observaciones

Paciente al ingreso al area de Sanidad conciente orientado en tiempo lugar y persona caminando por sus propios medios se observa herida producida por obj cortopunzante en la region axilar pectoral derecho hacia izquierdo $\pm 8\text{cm}$ sin compromiso muscular y hombro izquierdo $\pm 7\text{cm}$ superficial y herida en region de 3er arco costal $\pm 1\text{cm}$ no profunda se realiza curacion fue valorado por el doctor Alexander el cual decide suturar con seda #3/0 y ordena administrar 7 ampollas de toxoide tetanico 40. Diclofenaco ampolla 100mg. ampicilina 40. paciente con signos vitales TA 120/80 FC 98x' saturacion 94 Fr 18x'. Paciente hemodinamicamente estable ingresa a su patio camina cliente orientado caminando por sus propios medios

Rodrigo Gonzalez
Auxiliar de Medicina
Resolución N° 00451

Solicitud de Medicamentos

Ciudad:

Fecha: 10/11/17

Establecimiento:

Nº de:

Documento:

Profesional:

Donat Alejandro Mexilla
1031731500

Medicamentos

MEDICAMENTO (Nombre genérico-dosis-frecuencia de administración)	Cantidad (Número)	Vía de administración	Cantidad entregada	Firma Interno
(1) Dexametasona 4mg/5ml	1	1		
(2) Penicilina 1000 UI/ml	1	1		

Firma y cédula Profesional

Sello Profesional

NOTA: Cada medicamento entregado al Interno, debe ser firmado a satisfacción.

Solicitud de Medicamentos

Ciudad:	Fecha: 06 / 11 / 2020	Establecimiento:
Nombre: David Montilla	Documento: 10017315000	
Profesional: I.P. 150501		

Medicamentos

MEDICAMENTO (Nombre genérico-dosis-frecuencia de administración)	Cantidad (Número)	Vía de administración	Cantidad entregada	Firma Interno
(1) Ampicilina 1000mg x 3 (tas)				
1 Amp 1000mg Dosis x 3 días				
(2) Ampicilina x 500mg x 3 días				
19/8/20				

Firma y cédula Profesional

Sello Profesional

NOTA: Cada medicamento entregado al Interno, debe ser firmado a satisfacción.

Establecimiento:

C. J.:
Nombre: David Alejandro Montilla
Documento: 0617315000
Fecha: 30/10/2017
TD: 54
Edad:
Sexo: F M
Diagnóstico principal: 14100 x A. Blanca p. u.
Profesional:

SS: 1) Paracetamol x 500 mg 75 mg (10 mg)
1 c/8 hrs
2) Dcl. f. n. x 500 mg 75 mg (10 mg)
1 c/8 hrs
7

Firma y cédula Profesional

Sello Profesional

Orden Médica

INPEC
Instituto Nacional de
Protección y Cuidado

Establecimiento:

C. E.

Nombre: Don. Alejandro Montilla

Fecha: 30/10/17

TD: 54

Documento: 0617313000

Diagnóstico principal: 1.000 x A Blanca

Edad:

Sexo: F

IN

Profesional:

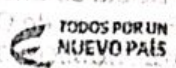
SS: 1.000 x A Blanca

10/8/17

10/8/17

Firma y cédula Profesional

Sello Profesional



Part 1

EPAMSCAS POPAYAN (ERE) - REGIONAL OCCIDENTE

TARJETA ALFABETICA, ANTECEDENTES Y DE PATIOS

Fecha generación: 14/03/2017 09:30 AM

Formula
Dactiloscopica

1 U I O O S M
L U I I O S 9

T.D. 235015354



Fecha Ingreso: 13/03/2017 Fecha Captura: 27/02/2017 N.U. 953828

Apellidos y Nombres: MONTILLA ORTIZ DAVID ALEJANDRO

Documento de Identidad: 1061731500 Expedido en: Popayan - Cauca

Otros Nombres:

Apodos:

Nacido en: Popayan Departament Cauca Fecha: 19 SEP 1988

Padres: Francisco Montilla y Olga Ortiz

Estado Civil: Union Libre Nombre Esposa(o) Compañera(a): Jhoana Pino

Educación: Basica - Grado 4

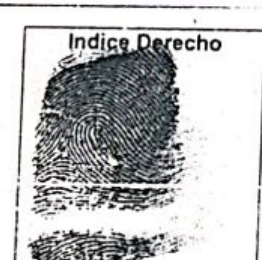
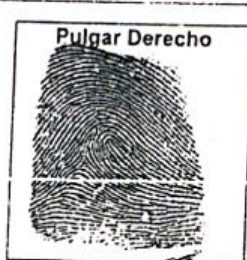
Profesión: Oficio:

Autoridad a Cargo:

Situación Jurídica:

Delito: Sin Informacion

Observaciones:



USUARIO: RB4628322

"RP_MONODACTILAR"

OP.11-16-08.V03

	PROCESO INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	3
	REG-IN-CE-006	Página	1 de 2

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

PROCURADURÍA 184 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Radicación N°. 2012 (5045) de 25 de febrero del 2019.

Convocante (s): **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ - CAROL YULIANA MONTILLA - OLGA LUCIA ORTIZ - FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA - YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ - YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ**

Convocado (s): **INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO INPEC**

Medio de control: **REPARACIÓN DIRECTA**

En los términos del artículo 2.º de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.º del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015¹, el Procurador 184 Judicial I para Asuntos Administrativos expide la siguiente

CONSTANCIA No. 2012:

1.- Mediante apoderada judicial, la parte convocante, conformada por: **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ - CAROL YULIANA MONTILLA - OLGA LUCIA ORTIZ - FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA - YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ - YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ** presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día **19 de enero de 2019**, convocando a: **INPEC**.

2.- Las pretensiones de la solicitud fueron las siguientes: Invocando como medio de control el de **REPARACIÓN DIRECTA**, busca mediante la conciliación prejudicial: "a) **CONCILIAR** el reconocimiento del centro penitenciario y carcelario San Isidro, es responsable de todos los daños y perjuicios causados al señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** en calidad de directo afectado (lesiones acaecidas el día 30 de octubre de 2017 cuando en su calidad de interno del **INPEC** fue agredido con arma blanca), a su hija menor de edad **CAROL YULIANA MONTILLA**, sus padres **OLGA LUCIA ORTIZ** y **FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA** y a sus hermanos **YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ** y **YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ**, por los hecho ocurridos el día 30 de octubre del 2017", la cuantía de la solicitud es de **CIENT SALARIOS MIINIMOS MENSUAL LEGALES VIGENTES (100SMMLV)**.

3.- El día de la audiencia celebrada el veintiocho (28) de marzo de 2019, no se hizo presente el apoderado de la parte convocada **INPEC**, por lo que se le concedió el término de tres (3) días para que justificara su inasistencia; transcurrido el término anterior, sin que el ausente justificara su no comparecencia, este Despacho, mediante auto de 1º de abril de 2019, consideró que no existía ánimo conciliatorio de la parte convocada – **INPEC** y se dio por agotada la etapa conciliatoria.

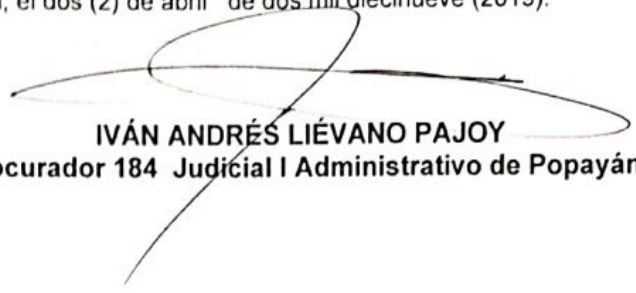
¹ Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho". Antigua artículo 9º del Decreto 1716 de 2009.

	PROCESO INTERVENCIÓN		Fecha de Revisión	24/08/2015
	SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL		Fecha de Aprobación	24/08/2015
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO		Versión	3
	REG-IN-CE-005		Página	2 de 2

4.- De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.

5.- En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos aportados con la conciliación.

Dada en Popayán, el dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019).


IVÁN ANDRÉS LIÉVANO PAJOY
 Procurador 184 Judicial I Administrativo de Popayán

Señor:

JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN.

E.

S.

D.

ACCIÓN: CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ y otros
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"

FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO mayor de edad y vecino de la ciudad de Popayán, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.616.302 expedida en Popayán Cauca, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado del señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** y otros me permito presentar ante su despacho **DEMANDA DE CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA** en contra del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** por los hechos acaecidos el día el 30 octubre de 2017 y como consecuencia de los mismos hechos sean reparados en los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes.

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES

1. PARTE DEMANDANTE:

- **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.731.500 de Popayán en calidad de afectado directo, actuando a nombre propio y en representación de su hija menores de edad **CAROL YULIANA MONTILLA BENAVIDES**.
- **OLGA LUCIA ORTIZ BOLAÑOS**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 25.281.480 de Popayán en calidad madre.
- **FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.536.252 de Popayán en calidad de padre.
- **YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.733.517 de Popayán en calidad de Hermana.
- **YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. .061.768.248 de Popayán Cauca en calidad de Hermano del señor MONTILLA ORTIZ.

2. PARTE DEMANDADA:

- **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** representada legalmente por el director o quienes hagan sus veces o los represente al momento de la notificación de la presente demanda.

3. MINISTERIO PÚBLICO:

- El Señor **PROCURADOR(A)** JUDICIAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

4. AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DEMANDA

PRIMERO: La señora **OLGA LUCIA ORTIZ BOLAÑOS** y el señor **FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO** sostienen una relación sentimental de la cual como fruto de su amor procrearon a sus hijos los señores **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** con Registro Civil de Nacimiento No. 26998193, la señora **YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ** con Registro Civil de Nacimiento No. 26998194 y el señor **YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ** con Registro Civil de Nacimiento No. 26998227.

SEGUNDO: El señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** sostuvo relación sentimental con la señora **NANCY CLARENA BENAVIDES DE JESUS** y como fruto de su amor procrearon a la menor de edad **CAROL YULIANA MONTILLA BENAVIDES**. Según certificado de nacimiento No. 1058549178 adjunto al expediente.

TERCERO: El señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ**, ingresó al **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"- SAN ISIDRO** de Popayán Cauca el día 13 de Marzo del 2017, en donde se identificaba con TD No. 235015354 y estuvo recluido hasta el día 21 de Marzo de 2018. Según tarjeta alfabética adjunta.

CUARTO: El día 30 de Octubre del año 2017 el señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ**, mientras se encontraba recluido en el **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"- SAN ISIDRO** de Popayán Cauca fue atacado por parte de otros internos con Arma Corto punzante de Fabricación Carcelaria tal como lo señala la Historia clínica:

" Motivo de Consulta, Herida con Arman Blanca, paciente quien hace 40 minutos recibe herida con Arma Blanca a Nivel Pectoral Derecho, Brazo Izquierdo y Hombro Izquierdo por lo que es traído a este servicio".

QUINTO: Que en revisión se observa:

"Paciente que ingresa al área de sanidad consiente, orientado en tiempo, lugar y persona, caminando por sus propios medios, se observa herida producida por objeto corto punzante en la región a nivel pectoral derecho, brazo izquierdo 8cm sin compromiso muscular y hombro izquierdo 1cm superficial, herida en región de Tercer arco costal 1cm no profunda, se realiza curación, fue valorado por el Doctor Alexander en cual decide suturar con seda # 3 y ordena

administrar 1 ampolla de Toxoide Tetánico, Diclofenaco Ampolla 1m, Ampicilina , Paciente con signos Vitales TA 120/80 FC 78X Saturación S4 Fr18X, paciente Dinámicamente estable, regresa a su patio, consiente, orientado, caminando por sus propios medios".

SEXTO: El señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** a causa de la lesiones presentadas sufre daños materiales y morales, producidos por objeto corto punzante en la región a nivel pectoral derecho, brazo izquierdo, en la región de Tercer arco costal con una pérdida de movimiento y sensibilidad de su dedo Anular de la mano izquierda, ya que al parecer las heridas comprometieron un tendón.

SEPTIMO: El **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"- SAN ISIDRO** de Popayán Cauca incurrió en una falla en el servicio ya que es responsabilidad de este ente proteger y mantener al recluso en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad, por cuanto el deber de esa protección se amplía a la custodia y vigilancia constante de los internos.

OCTAVO: Por tal motivo una vez mi poderdante **MONTILLA ORTIZ** cumpla con la pena impuesta por la justicia y recupere su libertad, se va encontrar limitado e imposibilitado para desarrollar su vida cotidiana normalmente, pues este se encuentra con limitaciones físicas en la mano izquierda, y cicatrices en su cuerpo el cual lo limita siempre para desarrollar diferentes labores cotidianas.

OCTAVO: Mis poderdantes a causa de los hechos acaecidos el día 30 de octubre del año 2017 han sufrido un profundo dolor, agobio, angustia y la afección moral los cuales deberán ser reparados.

P R E T E N S I O N E S

Solicito señores Jueces Administrativos del Circuito de Popayán que previo el trámite de proceso de **CONTROL DE MEDIOS REPARACIÓN DIRECTA** contenido en el Art. 140 del CPACA solicito se pronuncien en sentencia definitiva las siguientes o similares declaraciones y condenas así:

1.- **QUE** se **DECLARÉ** que el **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** es **RESPONSABLE** Administrativa y Civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto patrimoniales como extramatrimoniales, ocasionados a mis poderdantes por las lesiones y consecuentemente perjuicios ocasionados el día 30 de Octubre del año 2017 a **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** y demás demandantes.

2.- Como consecuencia de la anterior declaración solicito se Condené al **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** a pagar, conforme a la siguiente liquidación o la que se llegare a demostrar dentro del proceso así:

2.1 **POR PERJUICIOS MORALES** páguese a mis mandantes **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ, CAROL YULIANA MONTILLA BENAVIDES, OLGA LUCIA ORTIZ BOLAÑOS Y FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO, YEIMI**

ALESANDRA MONTILLA ORTIZ y YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ la suma equivalente al valor de Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes "*pretium doloris*" como compensación por el profundo dolor sufrido por las lesiones presentadas.

O en su lugar solicito señor juez se reconozca por parte del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC"** este perjuicio el valor máximo que reconozca la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, en razón del profundo dolor, la pena, el agobio, la angustia y la afección moral ocasionada a mi mandante como consecuencia de los hechos ocurridos el día 30 de Octubre del año 2017 quedando así con un estado grave de salud el cual impide que le pueda laborar cuando recobre su libertad y de esta forma tenga un medio para subsistir él y su familia.

2.2 **POR CONCEPTO DE DAÑO EN LA SALUD:**

Solicito sea reconocido a el señor **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** la suma de cien (100) SMMV por cuanto mi representado hasta la fecha de la presente demanda presenta graves dolores y molestias región a nivel pectoral derecho, brazo izquierdo, en la región de Tercer arco costal con una pérdida de movimiento y sensibilidad de su dedo Anular de la mano izquierda y cicatrices en su cuerpo la cual dificultan el goce pleno del cual disfrutaba antes del hecho dañoso.

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C. (19) diecinueve
de octubre de dos mil once (2011). Radicación número: 68001-23-15-000-1999-00606-
01(20861) Actor: GUSTAVO CUELLO DÍAZ Y OTROS Demandado: NACIÓN - INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

- 26
- 3.- Se deberá pagar a los demandantes o a quien sus derechos represente al momento del pago fuera la indemnización, los intereses que se generan sobre el valor de las anteriores condenas desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta su efectivo cumplimiento conforme lo estipula el art. 192 y 195 CPACA.
 - 4.- Se condene al pago de costas y agencias en derecho causadas por el presente proceso.
 - 5.- Todas las sumas reconocidas se cancelaran a los demandantes por intermedio de su apoderado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD

El problema de la responsabilidad de estado debe resolverse con base en lo prescrito por Art. 90 de la Carta Política y desarrollado Código

Contencioso Administrativo en el Artículo 140 ley 1137 de 2011 en la cual el estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo.

Se puede afirmar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC- faltó a los deberes de cuidado y protección que se le impone respecto a los reclusos, obligación esta que se traduce en el deber de las autoridades penitenciarias de abstenerse e impedir el ejercicio de acciones que puedan poner en peligro los derechos de los sometidos al poder punitivo del Estado.

Si bien es cierto el daño no fue ocasionado directamente por funcionarios de la Instituto Nacional Carcelario Y Penitenciario para efecto de establecer la responsabilidad del Estado por falla del servicio a través de una acción; también es claro que la presencia de actos de violencia que se susciten entre los internos deberán ser conjurados por el personal de dicha Institución, es decir que corresponde a esta implementar todos los mecanismos de protección para los internos, pues si bien, se encuentran cumpliendo una sanción legalmente impuesta,

EN CUANTO AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PARA LAS LESIONES QUE SUFREN LOS INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.

"En principio la jurisprudencia del H. Consejo de Estado consideró que el régimen bajo el cual debía hacerse el análisis de la responsabilidad del Estado era el objetivo, régimen que se acogió con el argumento de que las entidades penitenciarias y carcelarias del país asumían frente a los reclusos una obligación de resultado, en virtud de la cual debían

reintegrarlo a la sociedad en iguales o mejores condiciones físicas y mentales de las que se encontraba al ser privado de la libertad.

En embargo, al evidenciar la Corporación que lo que se presenta en estos casos es el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso o tardío de los deberes de custodia y vigilancia inherente al servicio carcelario, concluyó que el régimen de responsabilidad que debe aplicarse es el de la falla en la prestación del servicio".

Frente al régimen de responsabilidad aplicable se permite traer in extenso reciente pronunciamiento del Consejo de Estado:

"En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa con miras a repeler las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha puesto de presente que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen 'relaciones especiales de sujeción'".

Al respecto, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha definido el contenido y alcance de tales relaciones; así por ejemplo, mediante sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, señaló:

Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción.

De la existencia, identificación y régimen de las llamadas 'relaciones especiales de sujeción'² entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.

De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación³ de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial⁴ (controles disciplinarios⁵ y administrativos⁶

¹ Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Exp. 21128 y del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13760, ambas con ponencia del Consejero, doctor Alir Hernández Enríquez.

² Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más importantes al respecto, Cfr. Sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.

³ La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona reclusa consistente en el deber de "cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible". Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la "inserción" del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda "sometido a un régimen jurídico especial". Así en Sentencia T-705 de 1996.

⁴ Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un "régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos", el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.

especiales y posibilidad de limitar⁷ el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado⁸ por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad⁹ del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales¹⁰ (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser¹¹ especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar¹² de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).

Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo¹³ en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente

⁵ Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992.

⁶ Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en sentencia T-065 de 1995.

⁷ Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996.

⁸ En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, "debe estar expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio", así en la sentencia T-705 de 1996.

⁹ Sobre la finalidad de la limitación a los derechos fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la posibilidad real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.

¹⁰ Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran "el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros", citada de la sentencia T-596 de 1992.

¹¹ Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de 2000.

¹² Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la sentencia T-522 de 1992, además se encuentra en un estado de "vulnerabilidad" por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, así en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.

¹³ Sobre el contenido de este deber positivo ver la sentencia T-153 de 1998.

a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos.

(iv) El deber positivo¹⁴ en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias¹⁵ que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización¹⁶ de los reclusos.

En este sentido, del perfeccionamiento de la "relación de especial sujeción" entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho^{17, 18}.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, señaló:

(...) La privación de la libertad de una persona la coloca en una situación de indefensión, que genera obligaciones de protección por parte de quien adopta la medida o acción restrictiva de la libertad. No importa que se trate de particulares o del Estado, y que la restricción sea lícita o ilícita.

Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio¹⁹. En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.

¹⁴ Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998.

¹⁵ Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.

¹⁶ La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en sentencia T-153 de 1998.

¹⁷ Sobre la síntesis de la doctrina constitucional de las relaciones de especial sujeción, en idénticos términos Cfr., Sentencia T-881 de 2002.

¹⁸ En el mismo sentido ver las sentencias: T-596/92, T-065/95, C-318/95, T-705/96, T-1190/03, T-490/04, T-881/02 y T-134/05.

¹⁹ Sentencia T-590 de 1998.

Lo anterior implica que el custodio tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el mayor disfrute posible de los derechos constitucionales de la persona privada de la libertad. Tratándose del Estado, supone la obligación de garantizar condiciones de dignidad del recluso. Garantía que únicamente se cumple si tales condiciones son efectivamente realizadas; es decir, no basta la adopción de medidas programáticas, sino que han de traducirse en realidad. Así, tal como lo ha señalado esta corporación, no pueden aducirse problemas presupuestales, sino que el Estado tiene la obligación de realizar el trato digno. Se trata pues, de una obligación de respeto.

'(...).'

'En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal -sea personal penitenciario o de otra naturaleza- (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno²⁰. Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos²¹. Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado²²' (Se ha subrayado y resaltado).

El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que al respecto ha sostenido la Sala al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas:

'En determinados eventos, sin embargo, el Estado asume una obligación específica de protección y seguridad, en virtud de la cual se hace responsable de los perjuicios que sufren las personas. Es el caso de los retenidos, quienes por encontrarse en una situación de particular sujeción frente al Estado en virtud de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen.'

'Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que

²⁰ Sentencia T-265 de 1999.

²¹ Idem. En igual sentido T-208 de 1999.

²² Corte Constitucional, sentencia T-590 de 1998.

pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.'

'(...)':

En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.

'Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado.'²³ (Negrillas adicionales).

La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Al respecto, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:

'De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

"En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquél es imputable al Estado."^{24/25} (Negrillas adicionales).

²³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, expediente 14.955. Sentencia del 24 de junio de 2004, exp. 14.950. Sentencia del 24 de junio de 1998, exp. 14.406. Sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 16.996.

²⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, exp. 20.125, Consejero ponente: Alier Hernández Enriquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 16996. Consejero ponente: Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial reiterada en la sentencia del 29 de enero del 2009, Exp. 16975.

Por este incumplimiento de sus funciones de protección al ser lesionado las personas que están a su custodia y protección, puede observarse que, un interno, que se encuentra bajo la custodia de la autoridad Carcelaria y Penitenciaria no puede resultar herido en actos que, perfectamente, son previsibles. Que en este caso sería la herida a manos de otros internos con un arma corto punzante de fabricación carcelaria de mi mandante siendo este un elemento prohibido en este establecimiento consagrado en la ley 65 art. 54. Tradicionalmente el Consejo de Estado ha demostrado como indicativa de una falla en el servicio como en seguida se destaca:

"En consecuencia, observa la Sala que el sólo hecho de que un interno haya tenido en su poder un arma corto punzante, con la cual hirió de muerte a uno de sus compañeros, denota un mal funcionamiento del servicio carcelario, pues las autoridades penitenciarias incurrieron en una omisión respecto de su deber de controlar el interior del penal y a los reclusos, impidiendo la entrada o fabricación de armas que puedan ser utilizadas por éstos para atentar contra sus compañeros o, contra los mismos guardias de la institución".

Ahora bien, una de las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC de acuerdo a los artículos 4º del decreto 2160 de 1992 y el artículo 6º del Decreto 300 de 1997²⁵ son las siguientes:

- (...) 3. Vigilar y custodiar los centros carcelarios y penitenciarios del orden nacional.
- 4. Determinar sistemas de seguridad, vigilancia y control al interior y el exterior de los establecimientos de reclusión."

Así mismo, algunos de los deberes de esta entidad tal como lo consagra el artículo 44 del Decreto 300 de 1997 son:

- (...) c. custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual.
- d. requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento.
- g. Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario."

Igualmente, para el caso objeto de estudio, es importante hacer alusión a los siguientes artículos:

²⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010). Proceso No: 660012331000199800454 01. Interno No: 18.800. Actor: Ofelia Pérez Díaz y otros. Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil diez (2010). Proceso No: 250002326000199501957 01. Interno No: 18.886. Actor: Eduardo Rojas Quinche y otros. Demandado: Distrito Capital de Bogotá.

²⁶El Decreto 300 de 1997 actualmente se encuentra derogado por el Decreto 270 de 2010.

***Artículo 46: RESPONSABILIDAD DE LOS GUARDIANES POR NEGLIGENCIA.** Los oficiales, suboficiales y guardias del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional serán responsables de los daños y perjuicios causados por los internos a los bienes e instalaciones de la institución, por fallas en el servicio de vigilancia atribuible a culpa o dolo, declaradas judicialmente.

Artículo 47: SERVICIO DE LOS GUARDIANES EN LOS PATIOS. El personal de custodia y vigilancia prestará el servicio en los patios y pabellones de los centros de reclusión, con bastón de mando e impedirá que entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su categoría.

Artículo 55: REQUISITA Y PORTE DE ARMAS. Toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso. Nadie sin excepción, en situación normal podrá entrar armado a un centro de reclusión. Ningún vehículo podrá ingresar o abandonar el establecimiento, ni paquete o documento alguno ni volumen de carga, saldrá de él, sin constatación y; requisita. Los internos deben ser requisados rigurosamente después de cada visita."

Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sentencia de noviembre 27 de 2006, Exp.14670, C.P. Ramiro Saavedra,

"la **OBLIGACIÓN Y FINES DEL ESTADO** - Constitución Política de 1991 / **POLÍTICA CRIMINAL** - Control social de carácter formal. Cumplimiento de la pena impuesta que debe ser justa y respetuosa de la legalidad existente / **AXIOMA DE EFECTIVIDAD** - Facticidad. Cumplimiento / **AXIOMA DE NORMATIVIDAD** - Validez del derecho. Cumplimiento / **ESTADO** - Función de seguridad. Puntos de vista

"El Estado dentro de las obligaciones y fines que la Carta Política le impone, se encuentra aquella consagrada en el artículo 2, esto es, la protección de todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, debiendo asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, para lo cual cuenta con la pena como instrumento que dentro del iuspuniendi permite la efectiva protección de los derechos constitucionales y humanos de todos los ciudadanos.(...) Dentro de la política criminal de nuestro ordenamiento jurídico, el Estado está obligado a ejercer un control social de carácter formal y a hacer cumplir la pena impuesta a quien ha cometido un delito, teniendo en cuenta que "(...) la pena no solamente tiene que ser justa sino que debe ser respetuosa de la legalidad existente; se debe soportar en los axiomas de efectividad («facticidad») y normatividad («validez») del derecho, de donde su legitimidad dependerá del respeto a los límites que disponga el orden jurídico en tanto expresión de una razonable determinación y concreción de los derechos fundamentales, que en el proceso penal se predicen con igual énfasis tanto a favor del procesado como de las víctimas y la sociedad (...)". Sin duda, el Estado al controlar el cumplimiento de la pena, desempeña a su vez el ejercicio de la función de seguridad desde dos puntos de vista: i) respecto de la persona privada de la libertad, por cuanto le asiste la sujeción especial del recluso con respecto al Estado (...) ii) por otra parte, está en cabeza del Estado la obligación de seguridad, la que se irradia hacia la sociedad como garantía de eficacia de la pena como elemento de protección de los derechos de los administrados y de sacrificio socialmente útil."

En Sentencia del 23 de abril de 2008. M.P, Doctora Ruth Stella Correa Palacios, indico:

34

"El Estado asume la obligación de brindarles la protección que requieran, para lo cual deben cumplir, a la vez, con las obligaciones de custodia y vigilancia, que permiten garantizar la seguridad de los internos. Cuando el Estado falta a esos deberes, incumple también el deber de seguridad de los retenidos y, por ello, es responsable a título de falla del servicio de los daños que aquellos puedan sufrir, como sucede en los eventos en que concurren acciones u omisiones de las autoridades carcelarias que permitan a un tercero, que también se encuentre dentro de la misma institución en calidad de recluso, inferir daños a sus compañeros".

Sobre la protección de los derechos de los reclusos, el H. Consejo de Estado ha expresado que los derechos de las personas privadas de la libertad se encuentran restringidos y pues esto no exime para que tenga un trato digno de tal manera que el Estado deberá cumplir una doble función: la cual sería la de ejecutar la condena impuesta y a su vez la de proteger la humanidad de los internos recluidos en este generando una obligación de resultado, en virtud de la cual deberán ser reintegrados a la sociedad en iguales o mejores condiciones físicas y mentales de las que se encontraba al ser privado de la libertad, de tal manera que al purgar su pena con la sociedad los devuelva en las mismas condiciones en las que hubiere sido capturados

Los argumentos del Consejo se resumen así:

"(...) Desde el punto de vista jurídico del deber de la Autoridad Carcelaria la Tarea protectora tiene como objeto mantener al recluso en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad. El deber de esa protección se amplía en el artículo 44 literal c de la Ley 1260 de 1992, a la custodia y vigilancia constante de los internos. Como se ve del contenido obligacional de esas normas es doble: De un lado los siguientes deberes: la custodia entendida como el deber de cuidado, la asistencia y conservación de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios. De otro lado, la vigilancia, que conlleva el deber de atención exacta en las conductas de las personas a su cargo, es decir, que las personas recluidas en los centros penitenciarios, no realicen conductas atentatorias contra sus propios compañeros, y la comunidad en general. La conducta desplegada por el agente criminal, quebranta el deber de vigilancia impuesta al Estado, por cuanto el daño producido, fue efecto de una persona que se encontraba sometida a la vigilancia especial que se ha aludido. Por consiguiente se infiere: que el INPEC no cumplió con sus deberes de custodia de los presos y de vigilancia del centro carcelario (conducta irregular por omisión), que infringe el ordenamiento jurídico legal visto, y el constitucional (art. 2º sobre el deber de proteger la vida). (...)"

Con los anteriores planteamiento expresados por mi parte podemos así solicitar la declaratoria de responsabilidad y consecuente condena al determinar que existen elementos de prueba y demás que se solicitaran en su oportunidad.

- Que mi poderdante estaba recluso para la fecha de los hechos en **PENITENCIARIA NACIONAL DE SAN ISIDRO DE POPAYÁN** según tarjeta alfabética.
- Que según los registro civiles de nacimiento de **OLGA LUCIA ORTIZ BOLAÑOS** y el señor **FRANCISCO ALEJANDRO MONTILLA CALIBIO** son padres de **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ**, la señora **YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ** y el señor **YEFERSON ALESANDER MONTILLA ORTIZ**
- Que según los registro civiles de nacimiento de **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** padre de la menor de edad **CAROL YULIANA MONTILLA BENAVIDES**.
- Que según los historia clínica de fecha 30 de octubre del 2017 mi poderdante **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ** sufrió lesiones con arma corto punzante de fabricación carcelaria en diferentes partes de su humanidad.

El análisis de las pruebas aportada e relación a la minuta de guardia y la historia clínica aportada hasta el momento de la presentación de la demanda me hace afirmar que en este caso, se produjo una falla de la administración por parte del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO SAN ISIDRO DE POPAYÁN** que consistente en la falta y adecuada seguridad, vigilancia y control de los reclusos, porque el personal de vigilancia estando en la obligación de evitar que se agredan entre si los reclusos con elementos prohibidos.

Como referente nota de relatoría sentencia de unificación del **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SALA PLENA** Consejero ponente: **DANILO ROJAS BETANCOURTH Bogotá D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832) Actor: ANDREAS ERICH SHOLTEN Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC Referencia: REPARACIÓN DIRECTA** Procede la Sala Plena de la Sección Tercera a unificar su jurisprudencia en relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones de carácter temporal, en el marco del recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera- Subsección B, el 25 de agosto de 2004, en la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La providencia será modificada.

DAÑOS SUFRIDOS POR RECLUSOS - Régimen objetivo de responsabilidad / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Afectaciones a la vida y a la integridad psicofísica de los detenidos. Vulneración del derecho fundamental a la dignidad humana / DAÑOS SUFRIDOS POR RECLUSOS - Aplicación del régimen general de

responsabilidad de falla del servicio si se evidencia que la administración penitenciaria funcionó anormalmente o fue negligente en el cumplimiento de sus deberes / PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN CENTROS CARCELARIOS - Régimen subjetivo de responsabilidad. Se debe demostrar la existencia de la falla del servicio / DAÑOS SUFRIDOS POR RECLUSOS - No todo detrimento que, en su salud, sufra el interno genera responsabilidad pues el mismo puede provenir de causas extrañas

[L]a Sección Tercera ha considerado que el régimen bajo el cual se estructura la responsabilidad del Estado por los daños causados por cuenta de la reclusión, pero que no pueden considerarse como inherentes a la misma, es el objetivo, régimen que, como se evidencia en la cita que viene de ser transcrita, ha encontrado un campo de aplicación privilegiado en los eventos de afectaciones a la vida y a la integridad psicofísica de los detenidos, pero que puede extenderse a todos los demás casos en los que el daño cuya indemnización se demanda es el resultado de la vulneración de derechos que de ningún modo pueden entenderse limitados, restringidos o suspendidos por la privación de la libertad, como es el caso de la dignidad humana. (...) Lo anterior sin que se deje de lado la aplicación del régimen general de responsabilidad, esto es, el fundado en la falla del servicio, el cual debe privilegiarse cuando se evidencie que la administración penitenciaria funcionó anormalmente o fue negligente en el cumplimiento de sus deberes. (...) en los eventos en que los daños cuya indemnización se reclama sean atribuidos a la prestación de servicios médicos en centros carcelarios, se ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable es el subjetivo, lo cual se explica porque, aunque producidos durante la reclusión, no se produjeron en virtud de esta última, de ahí que sea necesario demostrar la existencia de la falla del servicio para comprometer la responsabilidad del Estado. (...) el deber de protección asumido por el Estado en virtud de las relaciones de especial sujeción en las que, respecto de él, se encuentran los reclusos, no puede traducirse en una premisa según la cual las autoridades penitenciarias deban ser declaradas responsables por todo detrimento que, en su salud, sufra el interno, pues el mismo puede provenir de causas extrañas que, de no originarse específicamente en las condiciones de detención, constituyen causales de exoneración. **NOTA DE RELATORÍA:** Al respecto consultar sentencias de: 10 de agosto de 2001, exp. 12947 y de 8 de febrero de 2012, exp. 22943

al momento de presentarse la riña que dio como resultado la lesión del interno, este se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión, por lo tanto la entidad está en el deber de asegurar la vida e integridad de todos sus internos el daño Surge una probando así con la certificación de permanencia en la cual constata que mi poderdante se encontraba recluso dentro en este centro penitenciario y no será devuelto a la sociedad en las condiciones de vida en que ingresó, omitiendo los deberes de cuidado y protección que se le impone respecto de mi poderdante incurriendo así en la falla que como consecuencia conducirá a la declaratoria de responsabilidad

FUNDAMENTOS DE DERECHO

32

En derecho me apoyo en los Artículos 90 de la Constitución Política artículo 104 del de la ley 1437 de 2011, ley 65 de 1993 - artículo 54 / 56 / 70 y demás normas concordantes con nuestro ordenamiento jurídico

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Me permito estimar razonadamente la cuantía de la acción al momento de la presentación de la demanda en la suma de (100) SMMV correspondientes al perjuicio al daño a la salud solicitado para mi poderdante conforme a Art. 157 CPACA.

COMPETENCIA

Por el factor territorial y la cuantía, este proceso es de doble instancia, debiéndose tramitar la primera ante el usted es el competente juez Administrativo del circuito de Popayán para conocer de la presente demanda.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento incoado es el consagrado el código CPACA. Ley 1437 de 2011 en sus art. 179 y demás subsiguientes

AUDIENCIA DE CONCILIACION

El día 02 de abril del 2019 se inició la respectiva conciliación prejudicial en la procuraduría 184 en asuntos Administrativos en la cual asistimos las partes en la cual no hubo animo conciliatorio por parte de la entidad convocada quedado así agotado el requisito de procedibilidad.

MEDIO DE CONTROL

El procedimiento a seguir es el establecido en los art. 179 y siguientes del CPACA

PRUEBAS

Solicito tener en cuenta las siguientes pruebas

Para probar el parentesco

1. Registro civil de Nacimiento de CAROL YULIANA MONTILLA BENAVIDES COBO
2. Registro civil de Nacimiento de YEIMI ALESANDRA MONTILLA ORTIZ.

- 33
3. Registro civil de Nacimiento de YEFERSON ALESANDER MONTOLLA ORTIZ.
 4. Registro civil de Nacimiento de DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ.

para probar el daño y requisito de procedibilidad.

1. Derecho de Petición elevada al Instituto Penitenciario y Cancelario INPEC.
2. Constancia de conciliación prejudicial.
3. Historia clínica.
4. Tarjeta alfabética.

PRUEBAS POR SOLICITAR:

Téngase como pruebas las que relacione en la presente demanda y en caso de no ser tachadas como falsas u objetadas se les de el correspondiente valor probatorio conforme al Art. 215 CPCA y en caso de no tenerlas en cuenta solicito a su vez sea solicitadas por su despacho.

AI INSTITUTO PENITENCIARIO Y CANCELARIO INPEC

1. Copia autentica e integra de la hoja de vida del recluso anexando su tarjeta numérica y ficha decadactilar.
2. Informe de los hechos ocurridos el 30 de octubre del 2017.
3. El estado de ingreso al centro carcelario.
4. la minuta de guardia interna y de sanidad para 30 de octubre del 2017.
5. Copia de la historia clínica referente a los hechos y en caso de no ser legible manifestar día de los hechos ingreso, diagnóstico y tratamiento médicos realizados.
6. Certificación de reclusión para el día de los hechos.

CONSORCIO PPL

- Para que remita Copia autentica integra de la historia clínica del interno **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.731.500 de Popayán y en el centro penitenciario con el TD No. 235015354 para el día 30 de octubre del 2017, fecha de la ocurrencia de los hechos la cual deberá contener diagnóstico y tratamiento médicos realizados posteriores a causa de las lesiones.

PRUEBAS POR PRACTICAR

OFICIAR JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DEL VALLE DE CAUCA Y CAUCA

- Para que se sirva fijar fecha y hora para que mi poderdante **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.731.500 de Popayán y en el centro penitenciario con el TD No. 235015354. sea trasladado y así sea efectuada la valoración para poder determinar los efectos producidos por los hechos ocurridos el día para el día 30 de octubre del 2017 y así determinar el grado de invalidez

OFICIAR AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

- Para que se sirva fijar fecha y hora para que mi poderdante **DAVID ALEJANDRO MONTILLA ORTIZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.731.500 de Popayán y en el centro penitenciario con el TD No. 235015354. sea trasladado al **INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** y así sea efectuada la valoración para poder determinar los efectos producidos por los hechos ocurridos el día 30 de octubre del 2017.

La anterior solicitud por cuanto mi poderdante no cuenta con los medios para sufragar el consto del examen de la junta de invalidez y calificación el cual es de (1) SMMV.

A N E X O S

1. Poder para actuar
2. Los establecidos en el acápite de pruebas
3. Demanda para archivo
4. Cd que contiene la demanda y anexos escaneados.

N O T I F I C A C I O N E S

PARTE DEMANDANTE:

- A mis mandantes en la calle 15 numero 20b 187 B/ el retiro alto de la ciudad de Popayán Cauca.
- Al suscrito en la calle 12ª No. 4-71 tel. 8223456 Cel. 3016967921- 3117865192 dirección electrónica fabioarturoandrade@hotmail.com

A su vez manifiesto expresamente que acepto las notificaciones electrónicas al correo aportado conforme al CPACA.

PARTE DEMANDADA:

- La entidad demandada representada por el Director General en la ciudad de Bogotá quien deberá notificar al funcionario que tenga la facultad de recibir notificaciones la cual se realizara por intermedio del Centro CANCELACIÓN de San Isidro de Popayán en el kilómetro 20 en la vereda las guacas Popayán .
- A la Agencia Nacional de Servicio Jurídico del Estado en Bogotá en carrera 7 número 75-66 piso 2y3.

Atentamente,



FABIO ARTURO ANDRADE CAMPO
CC. No. 4.616.302 de Popayán Cauca.
TP. No. 163.021 del Consejo Superior de la Judicatura.